A veces conocemos los hechos históricos solamente a través de testimonios orales hasta el descubrimiento de documentos quepermiten consagrar de manera más sólida verdades en el ámbito académico. Es el caso de manera muy singular del siniestro Plan Cóndor.

Frédéric Richard

En el artículo *La verdad sobre el Plan Cóndor* publicado en el número de la revista l'Histoire del mes de noviembre de 2019 Maud Chirio de la Universidad de Paris-Est-Marne-La –Vallée y Mariana Joffily de la Universidad del Estado de Santa Catalina en Brasil muestran el papel esencial del abogado paraguayo Martín Almada.

Víctima de la dictadura de Stroessner, desde su exilio en Panamá y en Francia denuncia los regímenes militares en el marco de la defensa de los derechos humanos. Vuelve a Paraguay en 1992 con la democracia.

Descubre por casualidad en una comisaría de policía de un suburbio de Asunción un fondo de archivos considerables que ocupa un espacio de 300m en línea.

Son documentos que ponen en evidencia la represión de la dictadura paraguaya: el control de la población, la tortura…Pero contiene también una documentación que concierne las dictaduras vecinas. Es un fondo de archivos que evidencia la colaboración entre las dictaduras de América del Sur en el contexto del Plan Cóndor.

Los testimonios de los sobrevivientes torturados en sus países de exilio por agentes de su país de origen podían apoyarse sobre archivos.

El Plan Cóndor fue fundado en 1975 durante una reunión que tuvo lugar en Santiago de Chile.

El origen de la organización fue la lucha contra el comunismo. Maud Chirio y Mariana Joffily evocan durante los años 1930 mucho tiempo antes del Plan Cóndor un primer periodo de lucha contra el comunismo que implicaba un intercambio de informaciones entre Argentina, Brasil y Uruguay.

Es durante este periodo que aparece una "cultura de la seguridad nacional" que ve como el peligro nacional de primera importancia el revolucionario, un enemigo interno o refugiado en el exterior.

Las múltiples y complejas mutaciones políticas, económicas y sociales a partir de los años 1930, acentuadas por la Crisis de 1929, tienen una importancia esencial en lo que concierne a las representaciones de una parte de las élites políticas y militares de América del Sur en materia de seguridad y de concepciones de la nación que no podemos desarrollar en este trabajo.

Sin embargo, el momento clave se ubica durante los años 1960 con la revolución cubana, la inflexión dramática para América Latina en el contexto de la Guerra Fría.

Las autoras muestran el doble movimiento antinómico de la difusión de los ideales revolucionarios dinamizados por la revolución cubana y de las tácticas contrasubversivas y definidas por el ejército francés en Indochina y en Argelia por los oficiales David Galula y Roger Trinquier.

En la misma lógica, los Estados Unidos abren en 1946 en la zona del Canal de Panamá la Escuela de las Américas destinada a la formación de los oficiales sudamericanos.

En 1960, los Estados Unidos organizan una Conferencia de los ejércitos de América del Sur. Es el nacimiento de un espacio de encuentro regular de los 20 estados mayores de los países de esta región.

Las escuelas militares de la región empiezan a organizar cursos de formación.

El primer curso interamericano de guerra contra revolucionaria tiene lugar en Buenos Aires en 1961 con la invitación de oficiales extranjeros.

Hay que notar que contactos formales se establecieron entre oficiales franceses y argentinos desde los años 1950 en el contexto de la Guerra de Argelia.

Maud Chirio y Mariana Joffily mencionan que es en Caracas en 1973, en el marco de estas conferencias anuales organizadas por los Estados Unidos, que el jefe de estado mayor del ejército brasileño el general Borges Fortes reclama un intercambio de informaciones más sostenido.

Las autoras hacen hincapié en una colaboración entre las fuerzas armadas a menudo antes de la época de las dictaduras.

Dan dos explicaciones. La existencia de una fuerte autonomía de la cúpula militar frente a los poderes civiles o cuando estos mismos poderes civiles compartían la voluntad de una lucha contrarrevolucionaria con las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, es el golpe de estado del General Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en Chile que va a dar la impulsión decisiva a esta lógica de represión regional.

Los militares y policías brasileños por ejemplo pueden interrogar a sus compatriotas en el Estadio Nacional transformado en un verdadero campo de concentración al aire libre como lo mencionan las autoras.

En febrero de 1974, en Buenos Aires, una reunión crea una estructura que permite reprimir en otro país.

El evento reúne militares, policías y oficiales de inteligencia de Argentina-hay que subrayar que antes del golpe de 1976 el país conoció una deriva autoritaria durante el gobierno de Isabelita Perón- de Chile, de Paraguay sometido a la dictadura del General Stroessner desde 1954, de Uruguay bajo el mando de Juan María Bordaberry desde 1973 y de Bolivia dirigida por el general Hugo Banzer desde 1971.

La primera operación en septiembre de 1974 ve el asesinato en Buenos Aires del general legalista chileno Carlos Pratts y de sus esposa Sofía Cuthbert. Carlos Pratts

fue el jefe del ejército, el ministro del interior y de defensa del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende entre 1970 y 1973. La policía secreta chilena, la Dina, realizó el asesinato.

Vemos la paradoja de la época. Carlos Pratts es asesinado en un país dirigido todavía por un poder civil pero donde los servicios de seguridad colaboran de manera estrecha con las fuerzas de las dictaduras.

En mayo de 1975, el chileno Jorge Fuentes Alarcón y el argentino Amílcar Santucho fundadores de la Junta de Coordinación Revolucionaria fueron arrestados en Asunción.

La finalización del proceso que lleva al Plan Cóndor se realiza en noviembre de 1975 en Santiago durante una reunión secreta organizada por Manuel Contreras, el responsable de la Dina, la policía secreta chilena.

Oficiales chilenos, argentinos, bolivianos, brasileños, paraguayos y uruguayos precisan las tácticas represivas existentes. La referencia a las guerras contra insurreccional es cada vez más evidente.

Como la guerra revolucionaria es sicológica las fuerzas represivas deciden adoptar la misma lógica a través de la propaganda y la desinformación. Como los movimientos llamados subversivos actúan en secreto, las fuerzas represivas se mueven fuera de la legalidad. Como las fuerzas revolucionarias no conocen fronteras, las dictaduras se organizan en el marco de una lógica transnacional.

Maud Chirio y Mariana Joffily insisten en los tres pilares definidos durante la conferencia de Santiago.

El primero es la edificación de un central de inteligencia cuya base son los archivos de los países miembros.

El segundo es la realización de operaciones conjuntas.

El tercero es el más polémico como lo muestran las autoras. Se trata de planificar acciones fuera de América Latina, esencialmente en Italia, Suecia, Francia, España, México y los Estados Unidos.

Operaciones que implican la vigilancia de los opositores, pero también detenciones, exfiltraciones, ejecuciones…Los grupos del Plan Cóndor reciben a veces la ayuda de movimientos de extrema derecha locales.

Un ejemplo celebre fue la tentativa de asesinato en Roma del dirigente de la Democracia Cristiana chilena Bernardo Leighton y de su esposa Ana Fresno. La operación implicó agentes de la Dina y militantes neofascistas italianos.

A pesar de los trabajos cada vez más relevantes como los libros de Joan Patrice McSherry *Estados depredadores. La operación Cóndor y la guerra encubierta* (2005), de John Dinges *Los Años Cóndor* (2008) y de Franck Gaudichaud *Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur,* las dos autoras indican que no se conoce bien el funcionamiento del organismo.

Las prioridades y los objetivos eran adoptados por votos. Los tres países esenciales fueron Chile, Argentina y Uruguay. Fueron además los únicos Estados que aplicaron el tercer pilar, las acciones en los países no pertenecientes a América del Sur. El centro de la estructura se encuentra en Chile hasta 1976. El año del golpe de Estado de Videla se mueve a Buenos Aires. El Plan Cóndor entra entonces en su fase más activa por la violencia del Estado argentino.

Maud Chirio y Mariana Joffily evocan una represión de masa. Se trata de no dejar ningún refugio a los opositores. La persecución es sistemática.

El Plan conoce un inicio de declive a partir de 1978 a pesar de la integración de Perú y Ecuador. La represión sigue en los diferentes países. Sin embargo, problemas de soberanía empiezan a entorpecer la coordinación y la eficacia de las acciones conjuntas.

Las dos autoras indican que la última operación de la organización fue el rapto en Lima de 4 miembros de un grupo armado argentino en junio de 1980 en colaboración con los servicios de seguridad peruanos.

Una temática esencial mencionada por las dos autoras es el papel de los Estados Unidos. Insisten en la formación de los actores del Plan Cóndor por sus homólogos de los Estados Unidos.

Citan el caso del coronel brasileño Thaumaturgo Sotero Vaz que figuraba como representante de su país en la famosa reunión de noviembre de 1975 que vio el nacimiento oficial del Plan Cóndor. Fue instructor en la Escuela de las Américas y formado en la especialidad del combate en la selva.

Los Estados Unidos han participado también directamente al Plan Cóndor a través de un apoyo financiero y logístico. Las autoras mencionan el "Condortel ", un sistema de telex encriptado.

Maud Chirio y Mariana Joffily mencionan que documentos recientemente desclasificados del Departamento de Estado muestran la cercanía de esta administración con el Plan Cóndor.

En el marco de una charla en 1976 con el almirante Guzzetti , ministro de relaciones exteriores argentino, el secretario de Estado Henry Kissinger insistió sobre los esfuerzos comunes para luchar contra el terrorismo. Declaró "Queremos que tengan éxito. No queremos ser un obstáculo. Haré lo que pueda".

Es muy difícil evaluar el número de víctimas del Plan Cóndor. La clandestinidad de las operaciones, la falta de archivos y las dificultades que representan investigaciones en países extranjeros representan serios escollos.

Maud Chirio y Mariana Joffily indican que las cifras de 50000-60000 muertos y desaparecidos que se ve a veces en la prensa son en realidad una confusión entre las víctimas del Plan Cóndor y del conjunto de las víctimas de las dictaduras latinoamericanas durante los años 1960-1980.

La especialista de esta problemática, la historiadora Joan Patrice McSherry, evoca entre varios centenares y miles de víctimas. Solamente unas 500 personas han podido ser identificadas.

Las víctimas de la dictadura argentina entre 1976 y 1983 se elevan a 30000 personas, son cifras de una verdadera guerra civil. En Chile, entre 1973 y 1990, hubo 3000 víctimas.

Las autoras hacen hincapié en dos tipos de víctimas. Hay en primer lugar las personas conocidas cuya notoriedad y cuya influencia representaban un peligro mayor para los gobiernos dictatoriales.

Muchos asesinatos ocurrieron en Argentina antes del golpe de Estado. Hemos nombrado a Carlos Pratts. Podemos citar en 1976 a los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz.

El mismo año fue marcado por el asesinato ex presidente de Bolivia Juan José Torres. Se sospecha que el ex presidente brasileño João Goulart fue envenenado durante su exilio en Buenos Aires en 1976.

El asesinato de Orlando Letelier por la Dina fue sin duda el crimen más impactante. Orlando fue nombrado sucesivamente por Salvador Allende entre 1971 y 1973 embajador de Chile en los Estados Unidos, ministro de defensa, del interior y canciller.

El asesinato de Letelier ocurrió en Washington D.C. La secretaria de Letelier, Ronni Moffitt, murió en el atentado y su marido fue herido. El asesinato en suelo estadounidense y la muerte de una ciudadana de este país provocaron tensiones entre Chile y los Estados Unidos a pesar de la cercanía de los dos Estados en el contexto del Plan Cóndor. Provocó una investigación del Congreso de los Estados Unidos.

Hay también el encarcelamiento, la tortura, el robo de los niños y la muerte a menudo anónima de estudiantes, militantes de partidos, sindicalistas,…

La organización tenía sus centros de detención y tortura. Uno de los más famosos fue el taller automotriz Orletti. Detenidos de diferentes nacionalidades fueron torturados y asesinados a menudo por agentes de su país con la participación de delincuentes y militantes de la extrema derecha argentina.

El Plan Cóndor y las dictaduras son traumas todavía muy presentes en la memoria colectiva de los países que han vivido los crímenes del Plan Cóndor.

Como siempre, frente a tales acontecimientos históricos hay que manejar las relaciones muy complejas que unen las memorias, la acción de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas, la necesidad de la justicia y la investigación histórica.

Maud Chirio y Mariana Joffily mencionan que los sobrevivientes del Plan Cóndor fueron los primeros en exigir la apertura de los archivos y los juicios.

Ya hemos evocado como el abogado paraguayo Martín Almada, torturado en su país, desterrado, ha podido descubrir por casualidad con el juez José Agustín Fernández

archivos esenciales en el contexto de una investigación ligada a un antiguo preso político.

Las dos autoras citan a la activista uruguaya Lilián Celiberti arrestada en 1978 en Porto Alegre con su marido y sus dos hijos. Pudo escapar al Plan Cóndor por la acción de la prensa. Es una de las personalidades más activas en la reivindicación de la verdad y de los juicios.

Los juicios son escasos por el secreto que rodea todavía el Plan Cóndor a pesar de los esfuerzos de los militantes y los historiadores. Uno de los juicios más representativos permitió la condena en Buenos Aires del chileno Enrique Arancibia Clavel, militante de extrema derecha, miembro de la Dina.

Se lo reconoció como el responsable del asesinato de Carlos Pratts. Fue liberado en 2007 después de 20 años de cárcel. Fue asesinado 4 años después.

Las autoras muestran su pesimismo en relación a la búsqueda de la verdad y de la justicia en un mundo poco interesado en los crímenes cometidos en esta época.

Sin embargo, terminan su trabajo mencionando el juicio que tuvo lugar en la Corte de Apelación de Roma en julio de 2019. Vio la condena en ausencia a 24 militares y políticos latinoamericanos por el asesinato de 43 opositores en Italia.